



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

AUDIENCIA

Medellín, diciembre 14 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-015-2017-00722-01
Demandante: LIBIA DEL SOCORRO ACEVEDO VENTA
Demandado: AFP PROVENIR Y SEGUROS DE VIDA ALFA SA
Asunto: PENSIÓN DE INVALIDEZ

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Pretende la actora el reconocimiento de la pensión de invalidez, con el pago del retroactivo pensional, intereses de mora o indexación. Para sustentar sus pretensiones expuso que pese a haber sido valorada por seguros de vida Alfa y asignarle un resultado de 51.10% de PCL de origen común y estructurada el 23 de agosto de 2016, acudió a la IPS Universitaria que emitió concepto estableciendo que soporta una PCL del 51.80% de origen común estructurada el 28 de noviembre de 2011 y toda vez que entre los 3 años previos a tal data supera las 50 semanas de cotización, tiene derecho a la prestación reclamada.

En respuesta a la demanda la AFP Porvenir se opuso a los reclamos indicando que atendiendo al dictamen elaborado por esta entidad no se cumplen los presupuestos de causación. Sin que la actora haya tramitado ante la entidad la petición de acceso a la pensión de invalidez, ya que se solo pidió la calificación, de cuyo resultado no presentó objeción alguna, además que se le anunció que debería radicar la petición de la prestación, pero no lo hizo. De igual forma la aseguradora se opone las súplicas de la actora, apartándose de las conclusiones del dictamen que adosa la actora mismo que no fue elaborado por un equipo interdisciplinario, solo por un médico cuya opinión no es vinculante.

En la diligencia de que trata el artículo 77 del CPTSS en la etapa de fijación del litigio se estableció que el proceso tendría como objeto determinar si existe mérito para declarar la nulidad del dictamen elaborado por la entidad seguros Alfa SA para efectos de establecer si hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez conforme a la experticia presentada con la demanda.

En sentencia que zanjó la controversia en primera instancia, la A quo advirtió que la activa no señaló de forma específica los yerros que acusa en el dictamen de la aseguradora accionada, como tampoco agotó las etapas de contradicción de esta experticia y por el contrario procedió a solicitar un nuevo dictamen emanado de un médico particular, que no fue elaborado por un organismo interdisciplinario y frente al cual tampoco se permitió el ejercicio de contradicción, ora previo en sede administrativa, ora en el proceso judicial.

Bajo estas premisas estableció que pese a contar con una PCL en monto superior al 50%, no cuenta con la densidad de cotización necesaria dentro de los 3 años previos a la fecha de estructuración que fijó la aseguradora Alfa o la JRCIA, por lo que absolvió de todas las súplicas a la activa, a quien gravó en costas.

Inconforme con la decisión fue **recurrida por la activa**, quien insiste en la causación de la pensión de invalidez la que considera se sustenta en el dictamen aportado con la demanda, criticando el dictamen proferido por la JRCIA el que a su juicio no se sometió a contradicción pese a que la parte presentó los motivos de disenso, mismos reproches que señala en aquella experticia de la aseguradora demandada.

A continuación, el apoderado de la activa relató en extenso las anotaciones de la historia clínica que a su juicio llevaría a concluir que la fecha de estructuración es aquella señalada por la experticia que aportó con la demanda, ya que la enfermedad de artritis reumatoide tiene antecedentes desde el año 2011.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 la pasiva presentó escrito en el que reitera sus argumentos de defensa centrados en la inobservancia de los requisitos para acceso a la pensión de invalidez.

CONSIDERACIONES

Conforme a las pruebas aportadas al proceso se encuentra por fuera de discusión que: **1)** Que Libia del Socorro Acevedo Venta fue calificada por la compañía aseguradora Alfa con dictamen del 27 de octubre de 2016, asignándole una PCL del 51.10%, de origen común, estructurada el 23 de agosto de 2016 (pág. 29/35 archivo NN 1); **2)** Que la actora acudió a la IPS Universitaria – Universidad de Antioquia, donde el Médico José William Vargas Arenas que con experticia del 13 de julio de 2017 indicó que la PCL lo era en porcentaje del 51.80% de origen común estructurado el 28 de noviembre de 2011 (pág. 37/41 archivo N° 1) y **3)** Que la señora Acevedo Venta demuestra haber realizado cotizaciones a sistema de seguridad social por 761 semanas, acopiadas inicialmente en el RPM y a partir

del mes de mayo de 1999 en el RAIS, cesando las cotizaciones en el ciclo de abril de 2011 (pág. 43/59- archivo N° 1).

En este orden de ideas atendiendo a los reparos de la activa corresponde a esta Corporación determinar la procedencia de la pensión de invalidez, siendo necesario establecer si se cumplen con los presupuestos de la prestación, en particular la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral y la densidad de cotización acumulada a tal data.

Pues bien, sea lo primero indicar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2002 y adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el estado de invalidez de un afiliado al Sistema General de Pensiones debe establecerse mediante la valoración científica que efectúan entre otras, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL; las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte, las EPS, con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha adocinado que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar tenidos en cuenta en dicha valoración son controvertibles ante la Jurisdicción del Trabajo, teniendo el funcionario judicial plena competencia para examinar los hechos demostrados en el juicio y establecer algunos de los elementos constitutivos de la invalidez, toda vez que las experticias emitidas por los entes referidos no comportan pruebas solemnes, y por ende el Juzgador en su valoración no está sometido a la tarifa legal de pruebas y puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad, así como aplicar criterios de igualdad material (SL 2797 de 2020).

En adición ha expresado la Corte que, si bien los dictámenes emitido por las juntas de calificación de invalidez obedecen a criterios técnicos y científicos, ello no veda

al juzgador de instancia para que, con fundamento en los elementos de prueba aportados al proceso llegue a una conclusión diferente y determine el momento en el que se produce de manera definitiva la disminución de la capacidad laboral de la persona. (SL 4346 de 2020)

Libertad de apreciación y de formación del convencimiento que habilita al funcionario judicial a elegir entre los dictámenes aportados al proceso o incluso a solicitar un criterio adicional, para de esta forma, aplicar aquella experticia que genere mayor convencimiento, la que deberá emplear en su integridad ya que le está vetado escindirla y menos configurar uno nuevo dictamen con fragmentos de aquellos aportados (al respecto la sentencia SL 1021 de 2019)

Atendiendo a los criterios expuestos, se descende al **caso concreto** advirtiendo que se presentan 3 valoraciones de pérdida de capacidad laboral, la primera elaborada por Seguros Alfa SA frente a la cual no se presentó reproche alguno. Luego, por petición directa de la actora conceptuó el médico José William Vargas Arenas y dentro del trámite de este proceso se practicó el dictamen por parte de la Junta Regional de Calificación de invalidez, experticias que en conjunto señalan que la señora Acevedo Venta se encuentra en condición de discapacidad al superar el 50% de PCL, pero presentan diferencias significativas referente a la fecha de estructuración.

Para discernir tal contradicción procedió a la corporación a la revisión de las experticias hallando que contrario a lo indicado por la activa, aquella adosada con la demanda y con la cual sustenta sus súplicas no comporta un criterio científico sólido que lleve a esta corporación a alejarse de las conclusiones que exponen los cuerpos colegiados de calificación.

Como elemento inicial se destaca la conformación de cada experticia, en dos de ellas intervino un equipo interdisciplinario, así: El que proviene de seguros Alfa con profesionales de la medicina en las afectaciones funcionales que se discuten,

a saber: médico fisiatra, un médico laboral y fisioterapeuta. Aquel de la Junta Regional, por dos médicos y una psicóloga adscritos a esta entidad cuya misión esencial es este tipo de experticias. En contraste, el que pretende validar la pasiva solo presenta el criterio del médico laboral Dr. José William Vargas Arenas, por tanto, presenta una visión más restringida del asunto.

En cuanto a las patologías ponderadas la valoración del médico Vargas Arenas basa su decisión en dos diagnósticos: Artritis reumatoidea y EAP (enfermedad arterial periférica) y en la validación de sus hallazgos se remite a tres eventos médicos: una ayuda diagnóstica y tres consultas estas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, sin que exponga la evolución de este padecimiento, ni explique por qué no tiene en cuenta la copiosa historia médica posterior.

PARACLINICOS E INTERCONSULTAS RELACIONADOS CON LA CALIFICACION	
Fecha y Tipo de examen o interconsulta	Resultado
1 AYUDAS DIAGNOSTICAS	21/10/2011 LABORATORIO MED LINE LTDA RA LATEX FACTOR REUMATOIDEO POSITIVO
2 VALORACIONES MEDICA	28/11/2011 DR CARLOS FORONDA MONTOYA PACIENTE CON ARTRITIS REUMATOIDEA DE NOVO. COMPROMISO ARTICULAR GENERALIZADO E INCAPACITANTE PRESENTA HOY CALOR Y ERITEMA INTERFALANGICAS, MUÑECAS CODOS, HOMBROS, CODOS, CADERAS Y RODILLAS 28/11/2011 INCAPACIDAD POR CRISIS DE ARTRITIS REUMATOIDEA, HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 01/12/2011 URGENCIAS DOLOR MARCADO A LA MOVILIZACION DE LA ARTICULACION COXO FEMORAL REQUIERE MANEJO Y SEGUIMIENTO POR CONSULTA EXTERNA.
3	
6. DESCRIPCIÓN DEL DICTAMEN	

Pág 39 – archivo N° 1

En contraste, las valoraciones de los cuerpos colegiados además de referirse al diagnóstico de artritis reumatoidea, pondera las afectaciones de: trastorno de tracto digestivo superior, hipotiroidismo e hipertensión arterial, señala que el 23 de agosto de 2016 se realizó valoración por reumatología refiriendo los diferentes hallazgos, (pág 31 – archivo N° 1). Mientras que la JRCIA hace un recorrido por atenciones desde el mes de noviembre de 2011 a agosto de 2016 con un panorama más amplio de la condición de salud de la accionante.

Ahora referente a la explicación de la fecha de estructuración, el médico Vargas Arenas se limita a expresar que desde el año **2001** existe un severo compromiso articular en tanto el 28 de noviembre de 2011 se anota “severa sintomatología articular”. Tomando esta última como fecha de referencia.

A la par las experticias de la aseguradora accionada y de la JRCIA coinciden en que la fecha de estructuración de la PCL data del 23 de agosto de 2016, que corresponde al día en que se realizó la valoración por reumatología.

En este aspecto es relevante indicar que la fecha de estructuración responde al momento en que la persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional como consecuencia de una enfermedad o accidente; lo que se determina con base en la evolución de las secuelas y evolución del padecimiento, soportado en la historia clínica, los exámenes clínicos y la ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder con la fecha en que se emite el dictamen de PCL. Adicionalmente, establece que en los casos en que no exista historia clínica, deberá apoyarse en la historia natural de la enfermedad. (artículo 3° decreto 1507 de 2014)

Bajo esta premisa para la corporación no resulta contundente la conclusión del médico José William, en tanto no se probó que existieran reportes de la dolencia de artritis desde el año **2001**, ya que de los reportes adosados al trámite el más antiguo corresponde al 28 de noviembre de 2011, el que corresponde al informe de una consulta que no refiere aquello que explica el médico en su dictamen, esto es no se reporta un severo compromiso articular, sino que alude a “compromiso articular generalizado incapacitante” (pág 30 – archivo 1)

Episodio que generó para la actora incapacidad del 28/11/2011 al 07/12/2011 (pág 31), del 24/01/2012 al 05/02/2012, del 6 al 10 de febrero de 2012, del 14 al 24 de febrero de 2012 y del 16/04/2012 al 04/05/2012 (pág 33, 35, 50, 85, 88, 94– archivo N° 1) sin que existan constancias de incapacidades posteriores.

La historia clínica revela constantes atenciones a partir del año 2011, en algunas de ellas se alude a mejoría o buena respuesta al tratamiento (consulta del 13/09/2012 – pág 63- archivo N° 2); sin embargo, entre los años 2012 a 2015 no existe evidencia de atención médica, ya que la historia clínica adosada reporta

una consulta del 05/10/2012 y la siguiente lo es del 21/10/2015 (pag 67/69- archivo N° 2) por tanto se desconoce el comportamiento de esta enfermedad en este interregno

En adición no puede pasarse por alto que en tratándose de enfermedades degenerativas la pérdida de capacidad laboral necesariamente no ha de responder a la fecha de la primera consulta o su diagnóstico en tanto el deterioro en las condiciones de salud es progresivo, por tanto el hito para efectos de determina la estructuración será el momento en que la enfermedad represente un impedimento para el desarrollo de las actividades ora productivas, ora cotidianas.

Es así que en el caso analizado no basta con la existencia de una consulta médica que refleje el padecimiento de artrosis para estructurar con ello la pérdida de capacidad laboral no solo porque no se conoce el grado de limitación que implicaba, sino que previo al 28/11/2011 no existe ningún reporte médico o registro de incapacidades y las que se generaron con posterioridad cesaron el 4 de mayo de 2012.

En adición, debe tenerse presente que en la condición de discapacidad de la actora no solo se pondera la enfermedad de artritis, sino que computa otros diagnósticos del sistema digestivo y del sistema cardiovascular, los que permiten que se supere con escaso margen el hito del 50%, esto es 51% y 52% de PCL, sin que sea posible establecer si para el año 2011 estos estaban presentes y su nivel incapacitante, pues como se evidencia, su presencia es necesaria para arribar a la calificación mínima que hace de la actora una persona en condición de discapacidad.

En suma, toda vez que el dictamen que pretende hacer valer el recurrente no contiene los elementos suficientes para derruir las conclusiones de las experticias elaboradas por los cuerpos colegiados, no existe mérito para concluir que la data de estructuración de la PCL de la señora Acevedo Venta en cuantía superior al

50% es previa al 23 de agosto de 2016 y sin que en los tres años anteriores a esta fecha la actora acopie más de 50 semanas cotizadas, requisito este de causación de la pensión de invalidez, imprósperas son las súplicas de la demandante, conclusión expuesta por el fallador de instancia y que confirma esta corporación.

Resta por indicar que se mantiene la condena en costas en primera instancia, la que también se asigna en esta a cargo de la actora, tasando las agencias en derecho en la suma de \$100.000 divida en parte iguales para ambas demandadas.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de decisión laboral **CONFIRMA FORMA TOTAL LA PROVIDENCIA RECURRIDA**, por la cual se absuelve a las accionadas de todas las súplicas.

Se condena en costas a la actora en ambas instancias. En esta instancia se tasan las agencias en derecho en la suma de \$100.000 dividida en partes iguales para ambas accionadas.

Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

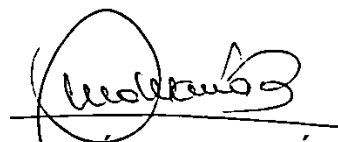
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001- 31- 05-015-2017-00722-01
Demandante: LIBIA DEL SOCORRO ACEVEDO VENTA
Demandado: AFP PROVENIR Y SEGUROS DE VIDA ALFA SA
Decisión: CONFIRMA
Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 17 de enero 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO